

I.C.A. de Valparaíso

Valparaíso, diez de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO Y OÍDO:

Por sentencia de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, del Tribunal de Juicio Oral de San Antonio, dictada en los antecedentes RIT N° 238-2023, RUC N° 2201242778-K, se condenó a JULIO ALEXIS RAMIS PADILLA a sufrir la pena de dieciocho (18) años de presidio mayor en su grado máximo, como autor del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en grado de consumado, y a la pena de dos (02) años de presidio menor en su grado medio, más las accesorias legales durante el tiempo de la condena, como autor de Hurto simple, previsto y sancionado en el artículo 446 N°2 del Código Penal, en grado de consumado, ambos ilícitos perpetrados el día 10 de diciembre de 2022, en la comuna de Cartagena.

Contra el laudo señalado, tanto el Ministerio Público como la querellante doña Ana Isabel Díaz Pérez, recurrieron de nulidad fundando sus arbitrios, en lo principal, en lo dispuesto en la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal y, en subsidio, en lo dispuesto en el artículo 374 letra e), en relación al artículo 342 letra c) y al artículo 297, todos del Código Procesal Penal.

Si bien estos recursos -originalmente- se plantearon, según el artículo 376 del mencionado Código, para ser conocidos por la Excelentísima Corte Suprema, ello no prosperó pues el máximo tribunal decidió, por resolución del 01 de diciembre pasado, declarar inadmisibles las causales principales de los libelos intentados y remitir los antecedentes a esta Corte para el conocimiento y resolución de la causal subsidiaria.

Con posterioridad la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisibles ambos recursos, en relación a la causal subsistente, los que fueron conocidos en la audiencia del pasado 21 de diciembre de 2023.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD DEDUCIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

PRIMERO: Que, en base a la causal subsistente del recurso, prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, se sostiene que la sentencia habría incurrido en una falsa fundamentación y habría omitido valorar la prueba rendida en juicio, acorde con los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

De modo particular -se denuncia- que existiría, en el considerando décimo tercero de la sentencia, tres vicios o transgresiones: falsa fundamentación, infracción al principio lógico de no contradicción e infracción a las máximas de la experiencia.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNPXXLZFEQB

SEGUNDO: Que en relación a lo que el impugnante denomina falsa fundamentación, ésta se verificaría en los motivos expuestos por los sentenciadores -en el indicado considerando décimo tercero- para desechar la calificación jurídica de los hechos de la acusación como delito de femicidio no íntimo, descrito y sancionado en el artículo 390 ter N°4 del Código Penal, que fuera propuesta tanto por la Fiscalía como por la querellante.

Así, según el recurrente, se habría rendido en el juicio suficiente prueba testimonial y pericial para acreditar el móvil discriminatorio en el actuar del sentenciado, constitutivo de la circunstancia cuarta del mencionado artículo 390 ter. Especialmente relevante para ello habría sido lo declarado por los testigos Mónica Lara y el Inspector de la PDI Andrés Garrido Cabezas, además de la declaración prestada en juicio por el perito médico forense Raúl Álvarez Maquiavelo. Si bien estas personas no aportaron prueba directa sobre las razones o motivos que llevaron al imputado a realizar determinada conducta, sí aportaron indicios, que darían cuenta de la exteriorización de un móvil discriminatorio. En este sentido las expresiones de la testigo Mónica Lara que *“le había pegado al maricon”*, que *“le pegó porque se le tiro y quería culiarselo”*, evidenciarían un indicio de rechazo hacia la identidad de la víctima, situación que no habría sido valorada por la magistratura. Al contrario, la sentencia le habría dado exceso de importancia a la declaración prestada en juicio por el imputado, como si sólo de ella se pudiera concluir los motivos que él tuvo para matar a la víctima, dando por verdadero lo que declaró éste, al señalar que “se pudo percatar de su condición u identidad de género, pero que no fue algo que le molestara”.

Por consiguiente se denuncia, de este modo, que el estándar exigido por los sentenciadores sería imposible, en la práctica, de ser alcanzado, “pues naturalmente ningún acusado por delito reconocerá que su conducta fue motivada por un móvil discriminatorio”.

TERCERO: Que, respecto al reproche que constituiría infracción al principio lógico de no contradicción, el recurrente plantea que el tribunal -en el mismo considerando décimo tercero- quebrantaría su propio razonamiento, al tener por acreditado el dolo homicida del autor, desestimando la versión dada por el sentenciado y por otra parte, considerar completamente corroborada la versión de los hechos que él aporta, al momento de desestimar el móvil discriminatorio para matar a la víctima.

Con dicha forma de razonar, la sentencia estaría valorando de forma contradictoria la prueba del juicio, pues “respecto de la construcción y acreditación de la dinámica de los hechos, considera el testimonio del imputado, las declaraciones de testigos y peritajes como verdadera y concluyente, pero respecto de la acreditación de la motivación en el actuar, la considera insuficiente, incluso obviando el aporte de estas a la configuración del dolo”.



CUARTO: Que, en relación a lo denunciado como infracción a las máximas de la experiencia, se sostiene que la sentencia habría desestimado los indicios que emanaban de la prueba rendida en juicio, y que habrían permitido arribar a una conclusión que permitiere demostrar el móvil discriminatorio relacionado a la identidad de género de la víctima.

Las máximas de la experiencia constituirían sucesos previos que vinculan los hechos con las pruebas, que tienen como fundamento la observación de una asociación más o menos regular entre dos hechos, y cuya finalidad es intentar aproximarse a la verdad acerca de los hechos inferidos. Así, sería un signo común o indiciario del móvil discriminatorio, avalado por la experiencia y del cual existían múltiples antecedentes en autos, la existencia de lesiones que evidencian alto nivel de ensañamiento, crueldad, violencia física innecesaria o excesiva, el uso de expresiones o comentarios transfóbicos u homofóbicos y la exposición explícita de la zona genital del cadáver.

Finaliza el recurrente reclamando que, si la sentencia hubiere incorporado en su razonamiento máximas de la experiencia, habría valorado adecuadamente la prueba rendida en juicio, en la que constaban una serie de indicios que permitían dar cuenta que la conducta homicida fue realizada con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.

QUINTO: Que, para resolver la pretensión anulatoria contenida en estos autos, cabe señalar que la sentencia impugnada, en su considerando noveno, fijó los hechos acreditados en el juicio conforme al siguiente tenor:

“El 10 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas aproximadamente, en circunstancias que la víctima JORGE GUILLERMO DÍAZ PÉREZ, conocida socialmente como CLAUDIA, de identidad sexual transgénero, de 74 años de edad, se encontraba en su domicilio de calle Mariano Casanova N°458, Cartagena, hasta el lugar llegó JULIO ALEXIS RAMIS PADILLA, de 39 años de edad, quien, con ánimo homicida, procede a golpear el rostro de la víctima con sus puños, causándole una fractura malar izquierda; asimismo le causó una herida en su cabeza, contuso cortante temporal derecha, además procedió a estrangularle con sus manos hasta causarle la muerte por asfixia y traumatismo craneo facial. Luego de ello procedió a sustraer del domicilio de la víctima un parlante tipo karaoke, un computador y un carro de feria, con los que salió al exterior”.

SEXTO: Que a su vez, en el considerando décimo del fallo denunciado, los sentenciadores señalan tanto los medios de prueba utilizados como la valoración que se hizo de los mismos para arribar a las conclusiones fácticas fijadas en el considerando noveno.

En lo que interesa, a los específicos vicios denunciados en el arbitrio revisado, la sentencia desarrolla sus argumentos para desestimar la calificación jurídica de femicidio no íntimo, que fuera propuesta por los acusadores, en su motivo décimo tercero,



expresando que “la prueba de cargo fue insuficiente ya que no se acreditó que el encartado sintiera odio o desprecio por la orientación sexual de la víctima o por su identidad de género”.

SEPTIMO: Que si bien es efectivo que la única información directa, sobre el motivo de la concurrencia del acusado al domicilio de la víctima, surge de la declaración del propio sentenciado (“... cuando indica que concurrió a su peluquería a cortarse el pelo, que se pudo percatar de su condición u identidad de género, pero que no fue algo que le molestara por eso se atendió con ella, agrega que mientras le cortaba el pelo le preguntó a que se dedicaba, señalándole el acusado que realizaba trabajos de construcción y que la afectada le habría ofrecido un trabajo de remodelación de su cocina, agregando que tres o cuatro días después concurrió al domicilio de Claudia a verificar lo del trabajo que le ofreció”; cfr. considerando décimo tercero, p. 43 de la sentencia), ello no determinaba inequívocamente la imposibilidad de demostrar, mediante la elaboración de presunciones, que la actuación del justiciable estuvo o fue motivada por la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima.

OCTAVO: Que las presunciones judiciales constituyen un proceso de razonamiento lógico, a través del cual, en base a hechos conocidos o manifestados en el proceso, el jurisdicente deduce otros, vinculados a la participación punible, la perpetración del delito o a las circunstancias de este último.

El recurso a la presunción judicial para la demostración de elementos o exigencias de naturaleza subjetiva -en un Derecho Penal respetuoso del principio de Culpabilidad por el hecho- se torna fundamental y cada vez más necesario, en la medida que aumentan los requisitos anímicos y/o psicológicos en la configuración de los tipos legales de nueva generación, toda vez que la motivación ajena no es una información o dato que pueda ser captado a través de los sentidos, siendo, en consecuencia, poco idónea, para su establecimiento, la prueba directa, tanto testimonial, documental como pericial.

NOVENO: Que al concluir los sentenciadores, en el último párrafo de su considerando décimo tercero, que “... no se ha acreditado que el móvil de homicidio fuera la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, sobre aquello, ninguna probanza se incorporó por parte de los acusadores, y como ya se indicó, solo tuvieron en cuenta los dichos del encartado a la testigo Mónica Lara”, no solo descartaron acudir a las presunciones judiciales para acreditar que la conducta del justiciable estuvo o fue motivada por la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, sino que rehuyeron todo razonamiento al respecto, ignorando el recurso al silogismo, tan necesario como esencialmente pertinente para la acreditación o descarte de esa clase de elementos subjetivos.

DECIMO: Que, por consiguiente, la precitada conclusión de la sentencia se encuentra desprovista del debido y completo soporte, pues



resulta insuficiente para descartar que el sentenciado actuó con motivo de la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima, en circunstancias que existían indicios o hechos conocidos que ameritaban al menos ser ponderados, tales como las propias expresiones del acusado (refrendadas por la testigo Mónica del Carmen Lara Rodríguez), relativas a que se había peleado con “un maricón que quería que me lo”, la dinámica en la causación de la muerte (“primero fue el traumatismo de cráneo y luego la asfixia mecánica”) y las múltiples lesiones encontradas en el cadáver, según explicó el perito legista Raúl Andrés Álvarez Maquiavelo, la ausencia de huellas defensivas en la víctima (“no se defendió en ningún momento, no tenía en sus uñas vestigios de haber impedido algo, fue una agresión directa a ella”) y la forma en que fue dejado su cuerpo después de la agresión (“con los pantalones abajo a medio muslo con el calzón puesto”), según refirió el funcionario de la PDI Andrés Garrido Cabezas; todo lo cual evidencia el incumplimiento del imperativo de fundamentación, previsto en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación al artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal.

DECIMO PRIMERO: Que la fundamentación de las sentencias ha de permitir conocer las razones que sustentan el contenido de la decisión jurisdiccional. Este deber de motivación -tributario de la carga inexcusable de resolver impuesta al órgano jurisdiccional por el artículo 76 de la Constitución Política de la República y reiterada en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales- se encuentra expresamente previsto en el artículo 36 del Código Procesal Penal, e impone a los jueces la obligación de analizar y valorar razonadamente todos y cada uno de los elementos de juicio reunidos. De lo que se trata con este imperativo es posibilitar la inteligencia intersubjetiva de la decisión judicial a fin de garantizar -como dice Luigi Ferrajoli- "la naturaleza cognoscitiva y no potestativa del juicio" (cfr. "Derecho y Razón Teoría del Garantismo Penal", Madrid, Trotta, 1995, p 623).

DECIMO SEGUNDO: Que así entonces el fallo impugnado ha incumplido el deber imprescindible del órgano jurisdiccional de motivar sus decisiones en un aspecto nuclear del juicio adjudicatorio, cual es explicitar de modo claro, completo y lógico por qué se rechazó tener por verificados todos los extremos del hecho que pretendían los acusadores y, por consiguiente, el arbitrio del Ministerio Público será acogido al haber incurrido el laudo reclamado en la causal de nulidad denunciada.

II. EN CUANTO AL RECURSO DE NULIDAD PRESENTADO POR LA QUERELLANTE DOÑA ANA ISABEL DÍAZ PÉREZ.

DECIMO TERCERO: Que, atendido lo señalado en los motivos séptimo a décimo segundo de la presente sentencia de nulidad, en los que se ha concluido que el fallo recurrido adolece de falta de fundamentación, lo que conducirá a su anulación, resulta



inoficioso emitir pronunciamiento respecto al recurso que fuera deducido por la querellante de autos doña Ana Isabel Díaz Pérez, al haber ésta denunciado la misma causal de invalidación ya revisada y planteado idénticas peticiones concretas contenidas en el arbitrio del Ministerio Público.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 26, 297, 342 letra c), 372, 374 letra e), 384 y 386 del Código Procesal Penal, se declara que **se acogen** los recursos de nulidad deducidos por el Ministerio Público y la querellante doña Doña Ana Isabel Díaz Pérez, en contra de la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, del Tribunal de Juicio Oral de San Antonio, dictada en los antecedentes RIT N° 238-2023, RUC N° 2201242778-K, por lo que dicha sentencia y el juicio oral que le precedió **son nulos**; debiendo remitirse los antecedentes al Tribunal de origen para la realización de un nuevo juicio oral ante la sala no inhabilitada que corresponda.

Comuníquese, notifíquese y regístrese.

Redacción del Abogado Integrante Sr. Felipe Caballero Brun.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente señora M. Marisol González Vera, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y a su acuerdo, por haber concluido sus funciones en este tribunal de alzada.

N°Penal-2963-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNPXXLZFEQB

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Alejandro German Garcia S. y Abogado Integrante Felipe Andres Caballero B. Valparaiso, diez de enero de dos mil veinticuatro.

En Valparaiso, a diez de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RNPXXLZFEQB